

Comisiones Obreras ante las actitudes políticas de la clase trabajadora española: entre el cambio posible y el cambio necesario (1980-1986)

The Workers' Commissions facing the political attitudes of the Spanish working class: between necessary change and possible change (1980-1986)

Joan Gimeno i Igual

Univesitat Autònoma de Barcelona - CEFID

Resumen

Las actitudes políticas de los y las trabajadoras españolas, tanto durante la dictadura como en la transición, han sido objeto no sólo de interés científico, sino que también han servido como argumento de fuerza justificativo o naturalizador de los resultados del proceso de cambio político en nuestro país. Nuestro objetivo, en el presente artículo, es observar qué papel jugó la percepción que se tenía de estas actitudes en el diseño de la estrategia sindical, así como en el proceso de configuración como sindicato.

Palabras clave: movimiento sindical, transición, democracia, actitudes políticas, Comisiones Obreras.

Abstract

The political attitudes among Spanish workers, both during the dictatorship and in the transition, have been of scientific interest. But they have also been a key argument to justify or naturalize the outcome of the process of political change in our country. The aims of this paper are to observe the role played by the perception of these political attitudes in the strategic design of the union, as well as in the process of union-building.

Keywords: trade union movement, transition, democracy, political attitudes, Comisiones Obreras.

Los límites del cambio político: ¿una sociedad moderada y pasiva?

«Si tuviéramos que preocuparnos por la gente que entra y sale del movimiento obrero, estaríamos todos en el manicomio. Y más en estos tiempos. A lo primero todo eran ingresos y euforia. Y ahora se mantiene cierta disciplina en los sitios de trabajo, pero aquí cuatro gatos. Sólo se anima esto cuando vienen los laboristas y despachan consultas. El franquismo nos ha maleducado a todos. Cuando leo eso de que el pueblo español está maduro para la democracia, me subo por las paredes. ¡Qué madurez ni que leches!»

Con su ácido estilo habitual ponía Vázquez Montalbán en boca del veterano sindicalista Cifuentes, allá por 1979, uno de los lugares comunes que han acompañado los relatos acerca del cambio político y sus consecuencias^[1]. En efecto, hago referencia al supuesto carácter pasivo primero, y moderado después, de la sociedad española en general^[2] y de la clase obrera en particular; carácter que se encontraría, entre otros factores, detrás de los límites del proceso de cambio político, del definitivo alejamiento de la posibilidad de realizar la «ruptura democrática» tal y como la había imaginado la oposición a lo largo del tardofranquis-

mo. Es decir, el relato sobre una supuesta «correlación de debilidades», según el cual si bien la espectacular irrupción del movimiento obrero en la política española fue capaz de impedir el continuismo franquista^[3], no fue en cambio capaz de imponer una ruptura conforme a las expectativas de la oposición y sus bases sociales, quedando ésta reducida al sucedáneo, no sólo discursivo, de la «ruptura pactada», término cada vez más repetido a lo largo de 1976^[4].

Sin embargo, para múltiples autores dicha moderación habría tenido un carácter eminentemente virtuoso, posibilitando así la consolidación democrática sin caer en «radicalismos» que provocaran «reacciones»^[5]; modulando, asimismo, de forma notable las estrategias de los actores colectivos, básicamente partidos y sindicatos, que se limitaron «más que a dirigir, o liderar, sus bases sociales, a secundarlas, o, como mucho a acompañarlas»^[6]. Dicha

1.- *Los mares del sur* recibió el Premio Planeta el 15 de octubre de 1979, justo el día después de la gran convocatoria de CCOO en la Casa de Campo contra el Estatuto de los Trabajadores y que habría de haber culminado con la convocatoria de una huelga general que nunca llegó.

2.- Uno de los elementos de la «matriz cultural» de la democracia española, véase: María Luz Morán, «La consolidación de la «matriz cultural» de la democracia en España (1982-1996)», en Ismael Saz y Manuel Pérez Ledesma (eds.), *Historia de las culturas políticas en España y América Latina*, Vol. IV, Zaragoza, Marcial Pons y PUZ, 2015, pp. 111-141.

3.- Carme Molinero y Pere Ysàs, *Productores disciplinados y minorías subversivas*, Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 270.

4.- Robert. M. Fishman, *Working-Class Organization and the Return to Democracy in Spain*, Ithaca, London, Cornell University Press, 1990, pp. 142-143.

5.- Santos Juliá, «Orígenes de la democracia en España», *Ayer*, 15 (1994), pp. 165-188; encontramos otra referencia a la moderación del movimiento obrero en Manuel Pérez Ledesma, «'Nuevos' y 'viejos' movimientos sociales en la transición», en Carme Molinero (ed.), *La transición treinta años después*, Barcelona, 2006, p. 149. Aplicada a los sindicatos véase: Manuel Redero San Román, «Los sindicatos en la democracia: de la movilización a la gestión», *Historia y Política*, 20 (2008), pp. 129-158 o Rafael Durán Muñoz, *Contención y transgresión. Las movilizaciones sociales y el estado en las transiciones española y portuguesa*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 200. Ciertamente, se trata de una tesis sincrónica al proceso de cambio político, como se puede observar en Juan Luis Cebrián, *La España que bosteza. Apuntes para una historia crítica de la Transición*, Madrid, Taurus, 1980, p. 19-20.

6.- Víctor Pérez Díaz, *La primacía de la sociedad civil*, Madrid, Alianza, 1993, p. 283. La base empírica de este estudio la constituye una serie de encuestas realizadas en 1978, 1980 y 1984. Sin embargo, habría que destacar que estas se realizaron en los mismos centros de trabajo y con la autorización de los patronos. Este hecho debería ha-



Manifestación contra el Paro en Sevilla, 1980 (Archivo Histórico de CCOO de Andalucía, Fondo M^a del Carmen Escobar - MACA).

«moderación virtuosa», conjuntamente a la hegemonía cultural y simbólica de unas nuevas clases medias desarrolladas bajo el franquismo habría llevado, sin graves «traumatismos», al cambio de régimen.

Otros autores, en cambio, y desde ópticas dispares, han matizado la idea de moderación señalando, por ejemplo, la dimensión anticapitalista asociada a la lucha democrática^[7]; la importancia de un movimiento obrero autónomo de carácter más radical pero escasamente presente, más allá de su rol potencialmente deses-

tabilizador, en las narrativas sobre el cambio político^[8]; la persistencia del prestigio de determinadas formas de representación obrera «desde abajo» como las asambleas^[9], indicativas de cierto carácter radical^[10]; o directamente refiriéndose al papel de algunas organizaciones políticas, ávidas por granjearse cierta «legitimación a través de

cernos tener una reserva crítica respecto a los resultados obtenidos, según los cuales los trabajadores mostrarían una «moderada satisfacción» respecto a las relaciones de intercambio empresarios-trabajadores.

7.- Xavier Domènech, *Cambio político y movimiento obrero bajo el franquismo*, Barcelona, Icària, 2012, p. 238. Para el caso del movimiento vecinal: Ricard Martínez, «Construir futurs. La dimensió anticapitalista del moviment veïnal», en Carme Molinero y Pere Ysàs, *Construint la ciutat democràtica*, Barcelona, Icària, 2010, pp. 265-317.

8.- Francisco Quintana (coord.), *Luchas autónomas y reestructuración capitalista, 1960-1990*, Barcelona, Alikornio Ediciones, 2002.

9.- Sobre la cuestión de las asambleas volvemos a Víctor Pérez Díaz, *La primacía de...*, p. 293, quien afirma que en 1980 un reducido 5% de los trabajadores consideraba que la asamblea debía protagonizar la representación de los trabajadores, sin embargo, en julio de 1988, y en base a un estudio más fiable del CIS, este porcentaje aumenta hasta el 10,8% (un 15,2% para los menores de 21 años), mientras que una mayoría del 38,4% consideraba que estas eran los espacios idóneos para ejercer la participación en las decisiones sindicales. CIS, *Estudio n.º 1771*.

10.- Emmanuel Rodríguez, *Por qué fracasó la democracia en España*, Madrid, Traficantes de Sueños, 2015, p. 356.

la desmovilización»^[11], como agentes de una moderación inducida. En este sentido, en relación al cambio político, se ha llegado a afirmar que no sólo la presión fue responsable de la caída del gobierno Arias, sino que también habría jugado un papel en dicho suceso la progresiva moderación del discurso opositor, lo que hubiera convencido a las élites del régimen acerca de la existencia de un espacio para la resolución política compartida^[12].

Sea como fuere, podemos observar que las actitudes políticas ocupan un espacio relevante en la explicación causal. Paradójicamente, contamos con los escasísimos estudios señalados para el caso de la transición^[13], apenas algunos referentes al franquismo^[14] y la pista se pierde, salvo honrosas excepciones^[15], en los primeros años del gobierno socialista. Solamente Pérez Díaz realizará un estudio para el año 1984, pero perspectivas como la de Fishman, que aborda el papel de los cuadros sindicales, no han tenido continuidad. En ausencia de amplios estudios empíricos para el período inmediatamente posterior a la victoria del PSOE hemos querido, en cierto modo haciendo uso del «paradigma indiciario»,

combinado con algunos de los estudios acerca del estado de opinión del momento, realizar una aproximación a la percepción que se tenía de las actitudes políticas de la clase trabajadora española, a través de una de sus principales instituciones de representación como era la CS de las CCOO.

Una advertencia inicial parece, sin embargo, necesaria. Hablar de actitudes políticas es hacerlo de algo tremendamente volátil y contingente —y es esta reserva epistemológica la que quizás más se echa en falta en los estudios disponibles— ; por eso creo que una aproximación como ésta, a través de la percepción de un actor colectivo fundamental, puede tener cierto interés. En este sentido, ha sido a través de *Gaceta Sindical* (GS), la documentación producida por el Secretariado Confederal (cuyas actas aparecen en las notas como ASC) y otros órganos de la central, aquello que me ha permitido acercarme a dicha cuestión y comprender cómo se modularon las estrategias sindicales y los posicionamientos políticos.

Un viejo dilema: entre la locomotora y el último vagón

Para hablar de la percepción de CCOO —que a pesar de no ser una organización explícitamente comunista^[16], sí que fue «hegemonizada de hecho» por militantes del PCE-PSUC^[17], aunque insuficientemente «comunizada»^[18]— es necesario comprender la cultura política comunista y el papel que ha jugado en ésta las reflexiones en torno a las bases sociales de todo movimiento transformador. En otras palabras,

11.– Emanuele Treglia, *Fuera de las catacumbas. La política del PCE y el Movimiento obrero*, Madrid, Eneida, 2012, p. 364.

12.– *Ibid*, p. 388.

13.– Como también señala Ismael Saz, «No solo élites. La lucha por la democracia en España», en Ferran Archilés y Julián Sanz (coords.), *Cuarenta años y un día. Antes y después del 20-N*, València, Publicacions de la Universitat de València, 2017, pp. 26-27.

14.– Véase al respecto Claudio Hernández Burgos y Carlos Fuertes Muñoz, «Conviviendo con la dictadura. La evolución de las actitudes sociales durante el franquismo (1936-1975)», *Historia Social*, 81 (2015), pp. 49-65. O Pere Ysàs, «¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío», *Ayer*, 68 (2007), pp. 31-57 o Molinero y Pere Ysàs, *Productores disciplinados...*, pp. 26-43.

15.– Rodolfo Gutiérrez, «La representación sindical: resultados electorales y actitudes hacia los sindicatos», *Documentos de Trabajo*, 72 (1994), 34 págs.

16.– Álvaro Soto-Carmona, «Comisiones Obreras en la transición y consolidación democrática. De la asamblea de Barcelona a la huelga general del 14-D (1976-1988)», en David Ruiz (dir.), *Historia de Comisiones Obreras (1958-1988)*, Madrid, Siglo XXI, 1993, p. 493.

17.– Emanuele Treglia, *Fuera de las...*, p. 383.

18.– *Ibid*, p. 363.

el debate sobre cómo articular una mayoría social que lleve al socialismo partiendo de las condiciones dejadas por el capitalismo^[19]. La importancia, en definitiva, desde una perspectiva leninista, de ser conscientes de las actitudes y mentalidades que constituyen la premisa de toda acción política. Una tensión inmanente en la táctica comunista que llevará a condenar enérgicamente las «desviaciones vanguardistas», opuestas a la pretensión de «conquistar mayorías» (a plantear «a las masas los problemas de un modo real y político, si se quiere obtener resultados»^[20]). O, en otros términos, el clásico debate de una derecha comunista subsumida a la fatalidad de las «correlaciones de fuerza» por un lado, y, por el otro, el de una izquierda que sistemáticamente obvia dicha cuestión para caer en el «voluntarismo».

Estos debates fueron una constante de las organizaciones con presencia comunista, tanto en la transición como durante la primera legislatura socialista. Ciertamente tuvieron un carácter distinto tratándose del partido o de la organización sindical, ya que ésta tuvo que orientar su acción para dar respuesta a los problemas concretos de la clase y no presentaba, como es lógico, un nivel de homogeneidad política-ideológica comparable a la del PCE-PSUC^[21]. Sin embargo, los dos espacios no fueron ni mucho menos compartimentos estancos como veremos. A partir de 1976, el PCE trató de promover un difícil equilibrio que permitiera combinar presión con moderación,

evitando así en todo momento el riesgo de desbordamiento que pudiera poner en peligro su estrategia, el alejamiento de las masas a través de cierto vanguardismo^[22], así como «quemar» a activistas y bases en movilizaciones de desgaste. Es decir, controlar la «huelgomanía» que pudiera suponer un estorbo tanto a la consecución de las libertades democráticas, como para la imagen de respetabilidad que los comunistas trataban de labrarse^[23]. La preocupación por evitar tensionar en exceso el músculo militante persistió también en los primeros años de democracia, en el que la crisis económica estaba generando un fenómeno de «delegados quemados»^[24] dada su escasa formación para afrontar el difícil contexto.

Esta táctica, en parte errática, de la dirección del PCE generó crecientes tensiones toda vez que profundizaba en dicha línea de moderación sin tener contrapartidas más allá de legalización. En este sentido, cabría entender los Pactos de la Moncloa de octubre del 77 que, a pesar de ser de carácter político y firmados por los partidos, tuvieron un impacto nada desdeñable entre los militantes obreros comunistas y condujeron, en algunos casos, a su radicalización^[25]. Para Carrillo, en el *Mundo Obrero* del 10 de febrero de 1980, el mayor peligro estribaba todavía en « caer [...] en un radi-

19.- Vladimir Ilich Lenin, *La enfermedad infantil del «izquierdismo» en el comunismo*, Pekín, Ediciones de Lenguas Extranjeras, 1975, p. 42.

20.- Antonio Gramsci, *Antología*, Madrid, Siglo XXI, 1974, pp. 189-190.

21.- Es más, la naciente confederación sindical, que dio el paso de movimiento socio-político a sindicato en octubre de 1976, por su carácter unitario, en ningún momento pretendió la homogeneidad ideológica y trató de preservar su autonomía política.

22.- Estas disposiciones ya aparecieron en una reunión de cuadros obreros, poco antes de la muerte de Franco, en Francia, véase *Nuestra Bandera*, 82, noviembre de 1975.

23.- Rubén Vega, «Las fuerzas del trabajo: los comunistas en el movimiento obrero durante el franquismo», en Manuel Bueno Lluch y Sergio Gálvez Biesca (eds.), *Nosotros los comunistas*, Sevilla, FIM/Atrapasueños, 2009, p. 360-363.

24.- ASC, Madrid, 6 de abril de 1982, Secretariado Confederal, Caja 4, Carp. 25, Archivo Historia del Trabajo (AHT).

25.- Sobre la evolución de la cultura política comunista véase: Alberto Sabio Alcutén, «Las culturas políticas socialista y comunista ante la ruptura pactada. Acción colectiva, consenso y desencanto en la transición española, 1975-1979», en Ismael Saz y Manuel Pérez Ledesma, *Historia de las...*, pp. 327-360.

calismo estéril e infecundo». El secretario general temía el desbordamiento de la presión sindical dada la actitud según la cual parecía «[...] percibirse algo así como la idea de que la vanguardia obrera realmente son Comisiones y no el partido»^[26]. Tanto la polémica en torno al Estatuto de los Trabajadores (ET), que terminaría por motivar la salida de Camacho del grupo parlamentario comunista, como el papel y la actitud del sindicato frente al Acuerdo Marco Interconfederal (AMI), fueron hitos en la escalada de la tensión entre partido y sindicato.

El 17 y 18 de mayo de 1980, en una reunión de cuadros sindicales del partido, que hasta entonces habían mantenido una notable autonomía^[27], salieron a relucir estas cuestiones, así como las diferentes percepciones respecto de las actitudes de la clase trabajadora^[28]. Carrillo hacía un llamamiento a la serenidad, pues el cambio había arrancado con la «reforma» y la euforia inicial, decía, se estaba desvaneciendo. Había que evitar «las fugas hacia delante» y el desviacionismo «ultraizquierdista» que tenía su origen en no haber estudiado en profundidad los *efectos psicológicos y políticos de la crisis* económica sobre los trabajadores^[29]. Vale decir, que este argumento parecía querer anticiparse a las críticas respecto a los Pactos de la Moncloa (en tanto que epifenómeno de la política de consenso que el partido venía propugnando) y, en este sentido, la arenga seguía con diversos llamamientos

al «realismo sindical» frente a la ola de conflictividad experimentada en 1979.

El informe del secretario general no fue objeto de una aprobación ni mucho menos unánime. Alfredo Clemente, secretario general de la unión de Barcelona, acusaba a la dirección directamente de haber «traicionado» las aspiraciones de los militantes con los Pactos de la Moncloa, de haberlos vendido como la «autopista al socialismo»^[30]. No se trataba, sin embargo, de un rechazo *in toto* de sus contenidos, sino de haber hecho «pasar por el aro» a la militancia y los trabajadores, convirtiendo dicho aro en el «Arco de Triunfo»^[31]. Es decir, acusaba a la dirección de haber hecho un análisis triunfalista de los pactos que, según él, suponían un claro retroceso. El equilibrio entre conectar con las más amplias masas sin por ello perder el encaje en cierta «vanguardia sindical» era francamente difícil y polarizaba el debate. Apareciendo el peligro, en definitiva, «de que queriendo coger el último vagón [...] se nos vaya la locomotora»^[32].

Una resolución del Comité Central de mediados de junio de 1980 parecía reafirmar las tesis de Carrillo en torno a la necesidad de «un golpe de timón». Aunque más ecuánime en su formulación, se conjuraba el peligro del «vanguardismo» concluyendo que: «Una política sindical para la crisis significa medir con realismo las acciones de lucha [...] Hay que auscultar continuamente el estado de ánimo de los trabajadores [...]»^[33].

Se trataba de asentar, en definitiva, una

26.- Gregorio Morán, *Misera y grandesa del Partido Comunista de España, 1939-1986*, Barcelona, Planeta, 1986, p. 584. Cuestión en la que también había insistido en la reunión de cuadros de 1975, véase *Nuestra Bandera*, 82 (noviembre de 1975), pp. 21-22.

27.- Por lo menos hasta 1976, véase al respecto: Rubén Vega, «La relación con Comisiones Obreras», *Papeles de la FIM*, 24 (2006), pp. 235-247.

28.- Existe un texto que resume las intervenciones en dicho encuentro: PCE: *Los comunistas en el movimiento obrero. Reunión de militantes comunistas*, Madrid, PCE, 1980.

29.- Santiago Carrillo, en *Ibid*, p. 12

30.- *Ibid*, p. 30.

31.- Así recordaba Clemente cómo un camarada dirigente de Altos Hornos del Mediterráneo, quizás Ángel Olmos Gausas o Miguel Campoy, interpretaba los pactos a principios de la década de los ochenta. Entrevista a Alfredo Clemente, realizada el 4 de noviembre de 2015 en Sant Sadurní d'Anoia. Entrevistador: Joan Gimeno.

32.- Eduardo Saborido, secretario general de las Comisiones Obreras de Andalucía, en PCE: *Los comunistas en ...*, p. 62.

33.- *Ibid*, pp. 17-18.

línea de moderación sindical. Como se desprende de la documentación, uno de los fundamentos era la actitud de la clase trabajadora que, rememorando el viejo problema *lukacsiano*, estaba siendo «agredida, pero que además una parte considerable de ella vota a sus agresores»^[34], tendencia que se mantuvo durante las legislaturas socialistas^[35].

Producto, en parte, de este viraje se firmó el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) del 9 de junio de 1981, conocido también como el «pacto del miedo» dada la nueva coyuntura abierta después del intento de golpe de estado del 23F. Era la primera vez que CCOO firmaba un acuerdo de estas características y que suponía una clara pérdida del poder adquisitivo de los salarios^[36], aunque se enmarcó en la propuesta de Plan de Solidaridad del sindicato (de sacrificios compartidos para salir de la crisis)^[37]. Sin embargo, también jugó un papel en dicha firma la percepción de que la posición críti-

ca respecto al Estatuto de los Trabajadores y al AMI había contribuido a aislar a CCOO y, en sentido contrario, permitido a UGT tomar cierta iniciativa. El ANE, además, recibió el apoyo de los más diversos sectores dentro del sindicato, siendo la cuestión de la moderación de los trabajadores el *leitmotiv* de las justificaciones^[38]. La UGT, además, se había aproximado a la CEOE^[39] y todo parecía indicar que «mientras exista un sindicato como UGT cuya clientela es la retaguardia de la clase obrera, los sectores moderados, difícilmente podremos dar el salto hacia esos sectores sin contar con UGT»^[40]. En el fondo, esta cuestión dejaba traslucir también la dificultad entorno a definir qué era exactamente un «sindicato de nuevo tipo» o «socio-político» —por no hablar del Plan de Solidaridad o la política de alianzas—, formulación que si bien se había demostrado funcional en la articulación de un antifranquismo obrero mostraba dificultades en el nuevo marco democrático.

Si bien parecía haber un consenso en torno a adaptar la táctica sindical al difícil contexto de una crisis que estaba teniendo efectos inhibidores en la movilización, el disenso (que tenía su expresión práctica en conflictos de entidad y reveses electorales en determinadas empresas relevantes) se producía básicamente alrededor del cómo; que no sería otro que un viraje hacia

34.- En palabras de Manuel Nevado, *ibid*, p. 65.

35.- Cuestión de gran relevancia, más cuando, en el mismo estudio del CIS referido en la nota 8, si bien una mayoría consideraba al gobierno socialista como claramente *business friendly* (54.6%), un 62,8% creía que debía virar y comprometerse con los intereses de las capas asalariadas (un 74.8% entre los menores de 21).

36.- En este sentido, cabría mencionar las justificaciones —pero también críticas— de carácter ideológico que los comunistas promovieron a través de los debates, homólogos a los del PCI, respecto a la austeridad. Véase: Alberto Sabio Alcutén, «Las culturas políticas...», p. 350. Manuel Sacristán, «La polémica sobre la austeridad en el PCI», en *Intervencions polítiques. Panfletos y Materiales III*, Barcelona, Icaria, 1985, pp. 186-195.

37.- Estos «sacrificios» o «esfuerzo» tenía tanto una dimensión que podríamos calificar como «horizontal», es decir, entre los diferentes segmentos cada vez más diferenciados de los trabajadores, entre ocupados y parados, por ejemplo; como otra vertical, es decir orientada a aumentar las transferencias de los sectores más pudientes de la sociedad hacia los más desfavorecidos. Su planteamiento inicial se produjo en el primer congreso, véase al respecto CCOO: *La acción sindical de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras*, Madrid, Secretaría de Información y Publicaciones, 1978.

38.- Fidel Alonso, de la Unión de Madrid, en declaraciones del dirigente en el II Congreso de CCOO en junio de 1981, citado en Robert Fishman, *Working-Class...*, p. 242-243. Nicolás Sartorius, «El Acuerdo Nacional de Empleo y las próximas primaveras», *El País*, 3 de julio de 1981.

39.- Véase: José M.^a Marín Arce, «Les organitzacions socials durant la transició: sindicats i patronal», en Pere Ysàs, *La configuració de la democràcia a Espanya*, Vic, Eumo, 2009, pp. 93-139. Ferrer Salat llegó a decir que echaba de menos pactos de la naturaleza del AMI en comparación al ANE, «Resolución del Consejo Confederal: Cumplimiento del ANE y negociación colectiva», *GS*, año III, 17 (1982), pp. 8-9.

40.- PCE: *Los comunistas en el...*, p. 62. En este sentido se expresaba Saborido.

mayores cuotas de pragmatismo e incluso la concertación social en una carrera por mantener cierta centralidad frente a UGT. Todo ello siempre en aras de atraer «a la mayoría de los trabajadores»^[41]. El resultado fue cierto «desencanto comunista» fruto de, entre otros factores, esta deriva moderada^[42]. De la misma manera, la exasperación de la militancia obrera que estaba sufriendo la crisis no debió ejercer una presión baladí^[43]. ¿El resultado final? Una incipiente división de la mayoría comunista que había dominado el sindicato, de la que cristalizarían distintas tendencias con planteamientos, a veces, opuestos respecto a la estrategia a seguir.

CCOO: de ariete democrático a bastión de la izquierda, pasando por pariente pobre

Después de la amplia movilización que siguió a la muerte de Franco, y durante la segunda fase del período de «transición sindical» (1980-1985/86), la densidad de las nuevas organizaciones sindicales sufrió una importante oscilación sin recuperar, ni mucho menos, los niveles iniciales. De representar un 56,4% en 1978, se pasó a un 13% en 1986. En este movimiento, CCOO pasó de representar al 31,1% a alrededor del 5%^[44]. Este descenso, generalizado en-

tre las distintas opciones sindicales, indica que, pasado este primer momento marcado por las expectativas abiertas por el cambio político, las actitudes políticas de los trabajadores fueron enfriándose, toda vez que el modelo sindical español invitaba a la estrategia del *free rider* y que la destrucción de empleo afectó a la afiliación^[45]. En este sentido, la baja densidad empeoró notablemente la situación financiera de las nuevas organizaciones, que habían nacido con importantes taras orgánicas. Con el agravante, para el caso de CCOO, de que la crisis tuvo un carácter inminentemente industrial —con casi 800.000 puestos de trabajo industrial y 400.000 en la construcción menos entre 1976-1985^[46]— minando así los bastiones del movimiento obrero (sin olvidar que tampoco contaba con importantes apoyos internacionales, como si fue el caso de UGT^[47]; más bien todo lo contrario, como demuestran cables desclasificados emitidos desde la embajada estadounidense en Madrid^[48]). Sin embargo, la «recon-

y nuevas realidades», en Pere J. Beneyto (Ed.), *Afiliación sindical en Europa. Modelos y estrategias (Vol.1)*, València, Germania, 2004 o CCOO, *La evolución de la afiliación*, Madrid, 2008. Roberto Cillerós Conde, «Las consecuencias de las nuevas características del trabajo en la afiliación sindical», en *Encrucijadas: Revista Crítica de Ciencias Sociales*, nº1, (2011), pp. 28-50.

45.— José Babiano Mora, «El sindicalismo español en el último cuarto de siglo XX», en VVAA, *Movimientos sociales y estado en la España contemporánea*, Cuenca, EUCM, 2001, p. 432-433.

46.— Andrés Pedreño Muñoz, «Desempleo, fuerza de trabajo y mercado laboral», en José Luis García Delgado (dir.), *Economía española de la transición a la democracia*, Madrid, CIS, 1990, p. 400.

47.— Véase al respecto Antonio Muñoz Sánchez, *El amigo alemán. El SPD y el PSOE de la dictadura a la democracia*, Barcelona, RBA, 2012.

48.— Tanto documentos desclasificados del Departamento de Estado, como las filtraciones de Wikileaks, dan buena cuenta del interés y esfuerzos por cerrar el paso a CCOO. Por desgracia, el rastro, salvo algún informe puntual, se pierde a partir de 1980. Sin ánimo de ser exhaustivo, pueden consultarse los siguientes: Cable de la Embajada

41.— En boca de López Raimundo, *ibid*, p. 78.

42.— El caso del PSUC es notorio en este sentido, véase: Carme Molinero y Pere Ysàs, *Els anys del PSUC*, Barcelona, L'Avenç, 2010, pp. 315-334.

43.— Juan Andrade, *El PCE y el PSOE en (la) transición*, Madrid, Siglo XXI, 2012, p. 418.

44.— Hay que advertir la complejidad de ofrecer datos en este sentido, estos provienen de José Antonio Sagardoy y David León, *El poder sindical en España*, Barcelona, Planeta/IEE, 1982 y Obdulia Taboadela, *La afiliación sindical*, Madrid, UCM, 1993, p. 425. Otros datos más optimistas en Jacint Jordana, «Reconsidering union membership in Spain, 1977-1994: halting decline in a context of democratic consolidation», *Industrial Relations Journal*, Vol. 27, Issue 3 (1996), pp. 211-224. Véase también al respecto Pere J. Beneyto, «La afiliación sindical en España: viejos tópicos

versión» también terminó radicalizando algunas actitudes obreras que, por ello, se acercaron a la central atraídos por sus posicionamientos más combativos en comparación a la UGT, aunque también operaron al margen de la misma, desbordándola en algunos casos^[49].

Las propuestas de salida de la crisis que impulsaron los diferentes ejecutivos pretendían la recuperación del excedente empresarial y el control de la inflación a través de una política de rentas que mermaría la capacidad adquisitiva de los salarios^[50]. Política en la que profundizó el primer ejecutivo socialista, esta vez como un elemento más de la mística de la «modernización»^[51].

de Madrid al Departamento de Estado, «The Presidents visit: some thoughts on Spain today and our approach to its future», May 21th, 1975, 1975MADRID03443_b. Bureau of European and Eurasian Affairs: «UGT - SWC debate: labor plant elections», November, 18th 1977, 1977MADRID09121_c. Bureau of European and Eurasian Affairs: «Worker's Comissions First Congress», June the 23th, 1978, 1978MADRID07082_d. Bureau of European and Eurasian Affairs, «Visit of AFL-CIO's Irving Brown», October the 6th, 1977, 1977MADRID07387_c. Bureau of European and Eurasian Affairs: «UGT - SWC debate: labor plant elections», November, 18th 1977, 1977MADRID09121_c. Bureau of European and Eurasian Affairs: «Worker's Comissions First Congress», June the 23th, 1978, 1978MADRID07082_d. Bureau of European and Eurasian Affairs, «Labor in Catalonia: an overview», December the 18th, 1979, 1979, BARCEL01030_e. Bureau of European and Eurasian Affairs: «Views of Marcelino Camacho, Workers' Comissions Leader», April 26th, 1979, 1979, MADRID05684_e. Bureau of European and Eurasian Affairs: «UGT Clearly Rejecting Unity of Action With Communists», July 6th 1979, 1979MADRID09458_e. Bureau of European and Eurasian Affairs: «PCE Leader Comments on Political Situation», October 10th, 1979, 1979MADRID14224_e.

49.- José M.ª Marín Arce, «La fase dura de la reconversión industrial, 1983-1986», *Historia del Presente*, 8 (2006), p. 72.

50.- Acerca de este proceso de reestructuración del capitalismo español véase, Miren Etxezarreta, *La reestructuración del capitalismo en España, 1970-1990*, Barcelona, Icaria, 1991.

51.- Véase al respecto Sergio Gálvez Biesca, «Del socialismo a la modernización: los fundamentos de la

Los efectos se hicieron sentir sobre la vida socio-económica, política y cultural de la clase trabajadora y en particular sobre familias y jóvenes^[52].

Un durísimo contexto, en definitiva, con un importante impacto también en las identidades colectivas. La fragmentación de la clase obrera^[53] y una muy incipiente todavía «balcanización» del mercado laboral —profundizada por la reformas socialistas^[54]— dificultaron sobremanera volver a encontrar ese «denominador común» de clase al que se refería Camacho^[55], dada la disparidad y variedad de posicionamientos. En paralelo se inició una crisis sindical en la cual, además del inicio de las tendencias señaladas y según algún analista, jugó un papel destacado la falta de «adecuación» y «rodaje» de los sindicatos a la nueva situación democrática. Daniel Lacalle advertía, en este sentido, también sobre las peligrosas tendencias hacia la corporativización y la no integración de nuevos sujetos, así como la necesidad de redefinir la función del sindicato^[56].

El artículo de la Lacalle seguía resaltando que si las estructuras sindicales estaban entrando en crisis a nivel europeo, ésta presentaba un carácter más duro en un país

«misión histórica» del PSOE en la Transición», *Historia del Presente*, 8 (2006), pp. 199-218. También en Sergio Gálvez Biesca, *La gran huelga general. El sindicalismo contra la «modernización socialista»*, Madrid, Siglo XXI, 2017

52.- James Petras, «El informe Petras», *Sediciones*, 13 (2000), p.110-111. Véase también José Antonio Pérez Pérez, «Una sociedad en transformación (1982-1996), en *Ayer*, nº84 (2011), pp. 99-127.

53.- Véase al respecto Andrés Bilbao, *Obreros y ciudadanos*, Madrid, Trotta y 1º de Mayo, 1993.

54.- Véase al respecto Sergio Gálvez Biesca, «El movimiento obrero en la España del tiempo vivido: del «sujeto político» al nuevo «precariado»», *Cuadernos de Historia Contemporánea*, vol. 30 (2008), pp. 199-226.

55.- «Reunificación de la clase, nuevas tecnologías y técnicas», *GS*, 19 (1982), pp. 4-5.

56.- «Reacciones sindicales a la crisis», *GS*, 16 (1982), pp. 13-15.

donde el proceso de *union building* se daba ya en una coyuntura económica adversa y en medio de un proceso de democratización en la que los sindicatos estaban funcionando como «escuelas de democracia» frente a una patronal situada en el «trogloдитismo». Otro aspecto que dificultaba la acción sindical era la pluralidad sindical y la falta de unidad de acción, aunque la primera correspondía a las preferencias de los trabajadores. También señalaba las contradicciones entre cierto grado de lucha reivindicativa y consolidación democrática; entre, en definitiva, los intereses de la afiliación y los generales. Esta situación de excepcionalidad habría condicionado enormemente la estrategia sindical, quedando el carácter socio-político «congelado para un futuro incierto» ante la competencia de UGT. Asimismo, señalaba el hecho de que el sindicato quizás había tenido unos posicionamientos erráticos frente al ET y al AMI, y denunciaba en este sentido lo que entendía como una estrategia «declamatoria» y «testimonial». Finalmente, Lacalle concluía reconociendo que el contexto impedía implementar «estrategias económicas ofensivas».

De momento, se trataba de presionar para garantizar el cumplimiento de las disposiciones favorables a los trabajadores contenidas en el ANE, o tender hacia la parte alta de las bandas que estos acuerdos fijaban, de cara a la negociación colectiva, en materia de aumentos salariales. El acuerdo no dejó de ser objeto de debates. Si a principios de 1982 la confederación hacía un balance positivo, aunque no sin fisuras^[57], el posicionamiento fue cambiando conforme

quedaba claro la falta de compromiso por parte del gobierno. Fue entonces cuando se trató de impulsar la protesta obrera en aras de su cumplimiento. En realidad, era la filosofía contenida en el Plan de Solidaridad, en tanto que propuesta sindical de superación de la crisis, lo que se encontraba en juego; por lo que resultaba estratégico exigir el cumplimiento íntegro de lo dispuesto en el acuerdo, sobre todo en materia de creación de empleo. Sin embargo, el efecto *boomerang* resultó evidente: las movilizaciones no sólo distaron de ser multitudinarias, sino que incluso sirvieron para mostrar el rechazo de los participantes a dicho acuerdo^[58].

La clase está por el cambio, más que para que nada se pare

Los resultados de las elecciones del 28 de octubre de 1982 supusieron un varapalo para los comunistas. El PSOE había conseguido capitalizar la moderación de determinados sectores sociales^[59], cuestión que para el PCE era uno de los elementos fundamentales para explicar el éxito socialista^[60]. En efecto, ya desde los comicios andaluces de mayo comenzaba a apuntarse dicha tendencia. En estas elecciones no se podía negar que el voto trabajador había ido a parar al PSOE —«barriadas enteras»—, pero también el de parte de la afiliación y simpatizantes de las propias CCOO^[61]. Ciertamente, como se reconocía en la reunión del

57.- Es el caso del sindicato nacional gallego, ASC, Madrid, 16 de febrero de 1982, *Secretariado*, Caja 4, Carp. 20, AHT. Más tarde, durante la celebración del 1º de Mayo de 1982, Fidel Alonso, dirigente de CCOO en Madrid, también abogaba, públicamente, por avanzar hacia una huelga general, ASC, Madrid, 4 de mayo de 1982, *Secretariado*, Caja 4, Carp. 28, AHT.

58.- «Menos de 4.000 personas acudieron ayer a la concentración de la plaza de Las Ventas de Madrid», *El País*, 9 de junio de 1982. El sindicato, a través de un informe de Agustín Moreno, también reconocía la pobreza de las movilizaciones así como el malestar que generaba el acuerdo. «Informe», 15 de junio de 1982, *Secretariado*, Caja 4, Exp. 32, AHT.

59.- «Tras las elecciones en Andalucía», *GS*, 20 (1982), p. 29.

60.- Gregorio Morán, *Miseria...*, p. 608.

61.- David Gardner, «El pariente pobre espera mejor trato», *GS*, 23 (1982 o 1983).

secretariado, el PSOE había sabido representar mejor el voto del cambio e interpelar a los sectores moderados —o «realistas» en algún análisis— mayoritarios, entrañando el peligro de que éste se convirtiera a su vez en voto a UGT^[62].

A pesar de ello, había que seguir batallando en unas elecciones sindicales ahora mediatizadas por este contexto e impregnadas del aroma de la victoria del PSOE. Para Ariza —responsable de organización y vocero de los sectores «carrillistas»—, el reforzamiento de los socialistas no era positivo estratégicamente para CCOO. Sin embargo, dichos argumentos no siempre eran compartidos. En este sentido, Sabarido advertía ante los efectos de una «conflictividad que se está desarrollando últimamente» caracterizada «por sus rasgos de salvajismo (sin perspectivas)», aconsejando que había que «prever y ser realista», para no aislarse, y abogaba por mantener una neutralidad respecto a los comicios frente a la desincentivación del voto socialista que proponía Ariza. Sin embargo, como había señalado Camacho, cada vez quedaba más claro que a la izquierda del PSOE no iba a haber ninguna opción con «peso real»; sí, en cambio, una amplia base movilizable que pudiera incidir en el cambio y, aunque no lo explicitaba, éste iba a ser el papel de CCOO^[63].

Aun así, CCOO saludó el triunfo del PSOE el 28 de octubre, reconociendo en él el final de la transición^[64], mientras advertía, a su vez, sobre los peligros de generar un nuevo desencanto ante posibles promesas frustradas en la dialéctica entre el *cam-bio posible* y el *necesario*^[65]. En definitiva, se

adoptaba una posición de apoyo crítico^[66], con el objetivo de presionar y promover políticas favorables a las mayorías sociales. Finalmente, los resultados de las elecciones sindicales de 1982 marcaron el *sorpasso* de UGT. Los datos del IMAC daban poco margen para la duda, en medio de una agria polémica entre los sindicatos. UGT aventajaba a su contrincante por tres puntos y medio, un 36,7% frente al 33,4% de delegados para CCOO^[67]. La central socialista había echado raíces, entre otros sectores, en los votantes de los estratos más moderados de la clase trabajadora^[68].

Representar a las «víctimas de la modernización»

Los años que transcurrieron entre 1980 y 1986 —a excepción de la extraordinaria actividad huelguística de 1984— estuvieron marcados por un descenso de la conflictividad, si tomamos como referencia la experimentada entre 1976 y 1979. A pesar de ello, ésta se mantuvo elevada en términos comparativos europeos, con sectores en conflictividad casi permanente a causa de los procesos de reestructuración^[69]. La

1982, las políticas de alianzas para llevar a cabo una salida a la crisis favorable a los trabajadoras fue desarrollada por Camacho en otro artículo titulado «Aliados posibles y aliados necesarios», *El País*, 13 de febrero de 1983.

66.– Acta de la Comisión Ejecutiva», 31 de octubre de 1982, *Ejecutiva*, C. 1, Carp. 25, AHT. Ratificada más tarde por el máximo órgano entre congresos: «Acta del Consejo Confederal Extraordinario», Madrid, 7 de noviembre de 1982, *Consejo Confederal*, C. 1, Carp. 24, AHT.

67.– «Los resultados oficiales dan a UGT vencedora de las elecciones sindicales de 1982. con el 36,71% de los delegados elegidos», *El País*, jueves, 10 de marzo de 1983.

68.– Véase, Ilse. M. Führer, *Los sindicatos en España*, Madrid, CES, 1996, p. 132.

69.– David Luque Balbona, *Las huelgas en España: intensidad, formas y determinantes*, Dirigida por Rodolfo Gutiérrez Palacios y Holm-Detlev Köhler. Tesis doctoral inédita. Universidad de Oviedo, Economía aplicada, 2010, p. 195-197. José Babiano Mora y Leopoldo Moscoso

62.– ASC, Madrid, 1 de junio de 1982, *Secretariado*, C. 4, Carp. 30, AHT.

63.– ASC, Madrid, 7 de septiembre de 1982), *Secretariado*, Caja 5, Carp. 6, AHT.

64.– Editorial, *GS*, 22 (1982), p. 3.

65.– En palabras de Camacho, *El País*, 8 de noviembre de

hipótesis, como hemos visto, según la cual los trabajadores preferían estrategias negociadoras en contextos de crisis, llevó a un ciclo de concertación social con la firma de una serie de acuerdos: primero el Acuerdo Marco Interconfederal (vigente para 1980 y 1981), luego el Acuerdo Nacional de Empleo (1982) y, finalmente, ya con ejecutivos socialista, el Acuerdo Interconfederal (1983) y el Económico y Social (1985-1986). CCOO firmó dos de ellos, el ANE y el AI, espolcada por motivos políticos. La filosofía general de los mismos fue la moderación salarial a cambio de inversiones creadoras de empleo u otro tipo de contrapartidas favorables a los intereses de los trabajadores^[70]. Sin embargo, estas transacciones no siempre fueron cumplidas por parte de los ejecutivos. Por ello, ya en el IV Congreso de CCOO, en noviembre del 87, se reconocería que, a pesar de ser una imposición de la coyuntura, la concertación había tenido nefastos resultados sobre el movimiento obrero y sindical^[71].

Ahora bien, en 1982, a pesar de los inconvenientes, según Camacho no se podía abdicar de la política de Solidaridad por la sencilla razón de que no había otra^[72]. El Acuerdo Interconfederal, firmado en febrero del 83, suponía un paso más en la dirección del intercambio entre moderación salarial y algunas concesiones laborales y disposiciones respecto al empleo o mejoras en la protección de los parados. Asimismo, su firma resultó congruente en el marco de

la posición de apoyo crítico al nuevo gobierno de izquierdas. Aun así, cada vez se hacía más necesario volver a definir una estrategia sindical ante el nuevo contexto y el ejecutivo entrante. La cuestión generaría interesantes debates en los que las percepciones de las actitudes políticas de los asalariados fueron un elemento central. En este sentido, y ante la evidencia de que las acciones del ejecutivo no coincidían con los planteamientos de la central^[73], Ariza proponía endurecer los posicionamientos respecto al gobierno, en una línea que le valdría a su sector el calificativo, ciertamente sensacionalista, de los «halcones», frente a las «palomas» de Camacho^[74]. Pero esta posición distó mucho de ser unánime, y otros, como Eduardo Saborido, eran partidarios de mantener el apoyo crítico, influido por la situación andaluza, probablemente^[75].

El Acuerdo Interconfederal fue el último pacto de macro-concertación firmado por CCOO y, por lo tanto, el último paso en la dirección establecida en el primer y segundo congresos. Fue aprobado por 98 de los 110 miembros del Consejo Confederal, a pesar de reconocer que se movía en los «límites del acuerdo posible»^[76]. Asimismo, de cara a evitar tensiones pretéritas, se inició un proceso de consulta orgánico sobre el mismo. Si en los órganos de representación territorial y sectorial, de un total de los 126 convocados, 97 eran favorables al AI; en los ramos, en un total de 114 asambleas cele-

Sarabia, «Los conflictos sociales en fase depresiva ante la adopción de política de ajuste: el caso español», en *Zona abierta*, nº56 (1991), pp. 120-173.

70.- Faustino Miguélez, «Sindicalismo y conflicto social en la España de la transición», *Mientras tanto*, 24 (1985), p. 32.

71.- Agustín Moreno, citado en Morán, Agustín, «Auge y crisis ...», p. 49.

72.- ASC, Madrid, 15 de junio de 1982, *Secretariado*, Caja 4, Car. 32, AHT.

73.- ASC, Madrid, 17 de mayo 1983, *Secretariado*, Caja 5, Carp. 25, AHT.

74.- «La línea dura de CC OO intentará aumentar su influencia en la ejecutiva de la central sindical», *El País*, 3 de mayo de 1984.

75.- De hecho las críticas a una deriva radical, oficialmente, acabarían por motivar la dimisión del histórico dirigente de las Comisiones Obreras de Andalucía, «Eduardo Saborido dimitió por su oposición a la política radical llevada a cabo por CCOO», *El País*, 1 octubre de 1983.

76.- «Resolución Consejo Confederal de 12 febrero de 1983», *Consejo*, Caja 5, Carp. 16, AHT.



Intervención de Marcelino Camacho en una asamblea explicando el Acuerdo Interconfederal. Sevilla, 1983 (Archivo Histórico de CCOO de Andalucía. Colección Fotográfica).

bradas en las que participaron 7.514 personas, hubo un 52% de votos afirmativos frente a un 41% negativos. Siendo rechazado, por ejemplo, en Alimentación, Campo o Construcción. No, sin embargo, en el Metal, federación bajo dirección «carrillista», donde fue aprobado. Es decir, se produjo una victoria más ajustada en las asambleas de base, que contrasta con el «barrido» en los órganos de dirección. En la estructura horizontal o territorial la diferencia fue mayor: de un total de 9.724 asistentes a las diferentes asambleas y encuentros, hubo un 60% de votos afirmativos y 33% negativos. Sin embargo, el AI fue rechazado en enclaves como Barcelona, Guipúzcoa, Madrid o Navarra^[77].

En total el proceso de consulta movilizó a un total de casi 22.000 personas. Lo que equivalía a un 5.8% de la afiliación y de los cuales un 21% eran miembros de órganos

sindicales. Los 7.514 delegados de ramos supusieron, en cambio, cerca del 21% del total elegido en 1982. Estas cifras muestran un sindicato parcialmente movilizado, pero con unas cuotas de lealtad relativamente bajas conforme nos alejamos de su núcleo dirigente. Cruzando ambos indicadores podríamos lanzar la hipótesis de encontrarnos ante unas bases poco movilizadas y que, en el caso de hacerlo, bascularían hacia unos posicionamientos moderados^[78].

Durante el verano del 83, resultaba ya evidente cuál iba a ser la orientación del ejecutivo. Orientación que terminaría por ser caracterizada desde CCOO como de «ajuste duro»^[79]. A partir de la presentación del *Libro blanco* relativo a la reconversión,

77.- «Acta de la reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva del día 11 de febrero de 1983», *Ejecutiva*, Caja 5, Carp. 16, AHT.

78.- En el estudio del CIS citado en la nota 8, preguntados sobre el balance la concertación social, un 35,2% de los encuestados la considera muy o algo beneficiosa para sus intereses, un 20% indiferente y un 27,4 algo o muy perjudicial.

79.- «Situación de la negociación Gobierno-Sindicatos», 25 de noviembre de 1983, *Ejecutiva*, C. 1, Carp. 38, AHT.

el sindicato fue modulando su posicionamiento inicial ante la evidencia de las intenciones del ministro Carlos Solchaga. Éste era diáfano en cuanto a sus líneas estratégicas: «una política-marco de carácter general que reduzca los costes de emplear trabajo, flexibilice las condiciones de contratación, reduzca el nivel de inflación y rebaje los tipos de interés», antes que «una actuación directa del sector público a través de los instrumentos tradicionales de la política industrial»^[80]. Ya con anterioridad, durante diferentes debates realizados en el seno del sindicato, habían aparecido voces críticas sobre «el desastre histórico [que supondría] entender que como los trabajadores han votado PSOE hay que conectar con ellos»^[81]. Estas tesis, defendidas por «carrillistas», sirvieron de eje para la articulación de un sector duro en el sindicato junto con los «prosoviéticos». Posturas que, conforme se profundizaba en la crisis comunista, se fueron radicalizando^[82] en lo que se entendió como un retorno a cierto «fundamentalismo ideológico» en aras de recuperar relevancia política^[83].

En mayo de 1983 CCOO decide, en el marco de un debate presupuestario en el que el «superministro» de Boyer llamaba

a moderar los aumentos salariales^[84], hacer un balance de la situación. Para ello se elaborará un informe que el secretariado valida para ulterior discusión en el Consejo Confederal^[85]. En éste se reafirma el objetivo estratégico de, a través de la negociación y la movilización, se imponga una salida favorable a la crisis, bajo la lógica de «que pague más quien más tiene». A la hora de sopesar las actitudes políticas de la clase trabajadora predominaba el análisis electoral, caracterizando los resultados del 28 de octubre como una inequívoca voluntad de cambio progresista que, al defraudar rápidamente algunas expectativas, habría favorecido la recuperación del voto comunista en las elecciones municipales de mayo de aquel año. Una lectura ciertamente optimista, sin embargo^[86].

El documento citado, seguía rechazando tanto una posición de «radicalismo exacerbado» como la «mera crítica puntual», definiendo el papel de CCOO como de agente de presión hacia el gobierno. Advirtiendo, en este sentido, que de no producirse cambios en la política económica del ejecutivo, los trabajadores podían sucumbir bajo la «frustración», con el agravante que ésta se manifestara en forma de apatía e inhibición. Asimismo, el informe hablaba del carácter «decepcionante» de la política económica y de la necesidad de una actitud más ofensiva, ya que permanecer a la expectativa era un peligroso factor desmovilizador. El informe concluía con un llamamiento a «una amplia, serena y puntual movilización de los trabajadores».

80.- Carlos Solchaga, «Prólogo del Ministro de Industria y Energía al «Libro Blanco de la Reindustrialización», en *Economía industrial*, nº232 (julio-agosto de 1983), p. 49. Sobre el ajuste estructural llevado a cabo, contraviniendo si programa electoral, por el primer ejecutivo socialista, véase Donato Fernández Navarrete y Gustavo Matías, «Ajuste estructural de la economía española y negociaciones con las Comunidades Europeas durante el primer gobierno socialista (1982-1985), *Historia del presente*, nº8, 2006, pp. 39-60.

81.- ASC, Madrid 31 de mayo de 1983, *Secretariado*, Caja 5, Carp. 26, AHT.

82.- Ariza llegará a tildar de totalitario al gobierno socialista. ASC, Madrid, 11 de febrero de 1986, *Secretariado*, Caja 8, Carp. 5, AHT.

83.- Fórmula con relativa malicia que podemos encontrar en Ludolfo Paramio, *Tras el diluvio*, Madrid, Siglo XXI, 1988, p. 22.

84.- «Boyer anuncia que en el mes de mayo se ha cortado la sangría de divisas y que la inflación va al ritmo previsto por el gobierno», *El País*, viernes, 3 de junio de 1983.

85.- «Informe para la reunión de los días 13 y 14 de junio», *Secretariado*, Caja 5, Carp. 26, AHT.

86.- Respecto a las municipales de 1979, habían perdido 642.142 votos, cayendo hasta los 1.499.907. En total, el PCE había perdido 1.230 concejales, casi un tercio de los obtenidos en las primeras elecciones municipales democráticas.

Realmente, lo que podemos observar es una falta de orientación clara y de cómo ciertos posicionamientos extrasindicales penetraban en la confederación generando, a menudo, tensos debates. Al mismo tiempo, la reconversión desataba duros conflictos, mostrando retazos de radicalidad obrera y un repunte global de la conflictividad para 1984. Aunque conviene recordar que, ya en abril de 1983, habían tenido lugar las huelgas generales en Gijón, Sagunto, Vigo y en el Bajo Deba, en las cuales CCOO se jactaba de jugar un papel centrado, entre el talante dubitativo de UGT y el «maximalismo» de otras opciones sindicales^[87]. Sin embargo, la confederación mostró por lo general una adaptación táctica a las expectativas de movilización, llegando incluso a secundar las acciones más contundentes, como en el caso de Gijón, o a promover alianzas con otros sindicatos de corte más radical como la Corriente Sindical de Izquierda (CSI)^[88].

El contexto general llevó al sindicato a promover la movilización socio-laboral^[89], con el efecto inmediato de un creciente enfrentamiento no solamente con el gobierno, sino también con la UGT. Una de las conjeturas manejadas era que «el cierre de filas en torno a una política antiobrera puede quebrar la familia socialista y hacer que se deshaga»^[90]. Las críticas del gobierno hacia el supuesto «giro radical» de CCOO, motivado por «intereses espurios», generó malestar en la central, cuya respuesta

consistía en interrogarse sobre dónde se encontraba el radicalismo, si en la práctica del sindicato o en la política del gobierno, solidarizándose a su vez con las luchas en marcha^[91].

El III Congreso y el final —*de facto*— de la concertación

La crisis en el PCE reverberó en el III Congreso Confederal de junio de 1984. En éste, CCOO se reafirmó en su estrategia de defensa de «los intereses de la mayoría de los trabajadores, no los de su vanguardia [...]», y dio así un espaldarazo a la estrategias basadas en el binomio presión-negociación^[92]. Sobre los acuerdos, Camacho señalaba que había un exceso de «doctrinarismo» a la hora de hacer un balance sobre los mismos, pero también se registraron críticas al «empecinamiento» de la dirección con una política de solidaridad en la que la central, ciertamente, parecía estar sola^[93]. Lo que resultaba, hay que reconocerlo, en su imposibilidad, máxime cuando el modelo propugnado por CCOO había de concertar a gobierno, sindicatos y patronal.

Los acuerdos sociales firmados por CCOO centraron buena parte de los debates. En este sentido, ante las críticas, la dirección aseguraba que la negociación centralizada estaba orientada a la rearticulación de la clase, a no dejar a ningún trabajador fuera por el hecho de no estar sindicado o por no contar con presencia sindical organizada en su puesto de trabajo, lo que era uno de los elementos inspiradores del «sindicalismo de nuevo tipo» que Comisiones pretendía representar, así como de la política de soli-

87.- «Informe sobre la negociación colectiva, aprobado por el consejo confederal del 19-4-83. Alta participación en la negociación y en las movilizaciones», *GS*, 26 (1983), pp. 9-18.

88.- Que en 1981 se había escindido de CCOO, véase al respecto Rubén Vega, *CCOO de Asturias, Oviedo*, CCOO Asturias, 1995, pp. 159-176.

89.- «Contra la reconversión y los despidos. Movilización en el metal», *GS*, 28 (1983), p. 17.

90.- ASC, Madrid, 2 de noviembre de 1983, *Secretariado*, Caja 6, Carp. 8, AHT..

91.- «¿Dónde está el radicalismo?», resolución del Consejo Confederal, noviembre de 1983, *Consejo*, Caja 2, Carp. 8, AHT.

92.- «III Congreso de CCOO. Marcelino Camacho: resumen del informe general», *GS*, 31 (1984), p. 3.

93.- *Ibid*, p. 6

daridad^[94]. Si bien los acuerdos no eran positivos o negativos *per se*, sino producto de una determinada correlación de fuerzas, parecía abrirse paso en el sindicato el posicionamiento según el cual había que «aprovechar el caudal de descontento y rechazo [...] para exigir acuerdos beneficiosos para los trabajadores [...]». Al tiempo que se reconocía también que «las causas de la desafiliación sindical son, sin duda, el paro, la crisis, la represión patronal. Pero los Acuerdos han influido también en la desafiliación [...]»^[95].

A pesar del tono autocrítico, Camacho fue reelegido por 579 votos a favor, 312 en contra y 54 en blanco. De las cuatro listas para la Comisión Ejecutiva la más votada fue también la de Camacho (500), seguida de la propuesta «carrillista» de Ariza (266), la «prosoviética» de Clemente (144) y, finalmente, la de la «izquierda sindical» de Nieto (27). El resultado aseguró la continuidad de la mayoría sindical y dio un espaldarazo a la línea seguida hasta entonces, incorporando, eso sí, algunas de las críticas realizadas. En este sentido, y entre algún que otro silbido, Camacho aseguraba que se tenía que «tirar hacia adelante, suavemente, de toda la clase para no romper», y continuaba preguntándose «¿Es que los hombres que pegan tirones bruscos sirven para ligarse a las masas? [...] ¿Qué es ser de clase? Es, por supuesto considerar, que los objetivos fundamentales conducen a la supresión de la explotación [...] Pero solamente se produce esto cuando las masas comprenden esta necesidad y luchan por ello»^[96].

Defendiéndose de los ataques en un congreso más que dividido, el secretario

general añadía además que CCOO había hecho bien en no forzar la situación contra un ejecutivo que no había dejado de tener un amplio respaldo popular. Haberlo hecho en sentido contrario, afirmaba, implicaba el riesgo de un segundo «desencanto»^[97]. Si bien los trabajadoras habían hecho gala de actitudes políticas más bien moderadas y depositado ciertas esperanzas en la gestión socialista, parecía cuestión de tiempo que estos sectores se acabaran alejando del gobierno ofreciendo así posibilidades de incidencia. Sin embargo, de momento las tendencias electorales, pero no sólo, parecían constatar lo que algunos llamaban el *mientras tanto*, en el que la movilización devenía difícil y amenazaba, de no aplicarse en el momento adecuado, con aumentar dicha moderación o inhibición en una suerte de círculo vicioso. A ciertas actitudes de docilidad —o precaución dependiendo del lugar de enunciación— de las cúpulas sindicales, habría que sumar, en todo caso, los efectos de la crisis y los «trazos de una cultura política subalterna de origen anterior» como los elementos que dificultaban emprender la movilización social^[98].

Ya hacía unos años, se afirmaba^[99], que la evidencia empírica señalaba que el igualitarismo y la solidaridad eran valores en retirada en la sociedad y esta tesitura fue, en última instancia, la responsable de los debates estratégicos en el seno del sindicato. Sin embargo, las fuentes de información de que se nutría Comisiones no eran de gran fiabilidad (fundamentalmente la prensa), llegando a, unos años más tarde, plantearse la necesidad de encargar un «barómetro sindical» propio^[100]. Sondar las actitudes

94.- *Ibid*, p. 12-13.

95.- *Ibid*, p. 14. Según Félix Pérez, de CCOO Euskadi y del sector carrillista, que en la reunión de cuadros de 1980, sin embargo, se había mostrado favorable a la presión para conseguir un «buen» AML. PCE: *Los comunistas...*, p. 70-71.

96.- *Ibid*, pp. 26-27.

97.- *Ibid*.

98.- Antonio Izquierdo, «Juicios y actitudes de los trabajadores en paro y los ocupados según encuestas recientes», en *Mientras tanto*, 13 (1982), p. 104.

99.- *Ibid*, p. 103.

100.- ASC, Madrid 15 abril de 1986, *Secretariado*, Caja 8,

se había convertido en algo vital para el sindicato, tanto para trazar la acción sindical, como establecer sus tesis políticas generales. A pesar de las divisiones mostradas en el congreso, de la fragmentación de la dirección y de los «duros debates» que se sucederían^[101], CCOO inició un giro hacia posturas de mayor confrontación frente al ejecutivo. Éste, a su vez, ante el viraje contrario a firmar más pactos sociales, respondió asegurando que desde CCOO no se estaba respetando «el deseo mayoritario de los trabajadores y de la sociedad española»^[102]. Todo ello en un contexto marcado por el aumento de la conflictividad contra la reconversión, no exenta ésta de trágicos acontecimientos.

Hacia la Huelga General

La apuesta por la participación salda del congreso, ejecutada por la nueva Secretaría de Organización, estuvo orientada a la extensión y consolidación organizativa y a la profundización de los análisis de coyuntura. Todo ello, a su vez, con el objetivo de canalizar el descontento, presionar al gobierno^[103] y perfilar una estrategia a «corto, medio y largo plazo [...]» de la que la central reconocía carecer^[104]. Fue a partir de 1984, en el marco de la negociación del Acuerdo Económico y Social (AES), cuando se aprovechó para lanzar una campaña de información y extensión organizativa. A mediados de noviembre se afirmaba haber alcanzado a unas 170,000 personas, en un total 372

actos, en los que el apoyo a la negativa de la central a firmar el AES era amplio^[105]. Sin embargo, las únicas perspectivas de movilizaciones concretas estaban relacionadas con los procesos de reconversión^[106] y eran, por lo tanto, de carácter defensivo, es decir en defensa de los puestos de empleo y contra los ajustes laborales.

A pesar de los planteamiento optimistas respecto al «desencanto» hacia la política socialista y el auge de los movimientos sociales^[107], del análisis de la negociación colectiva se desprendía que la conflictividad, entre enero y febrero de 1985, había caído un 29% respecto al año anterior, en el cual se habían perdido 122 millones de horas^[108]. Asimismo, se alertaba sobre ciertos posicionamientos «principistas» que «no sólo nos hacen perder espacio de negociación», sino que generaban incompreensión entre las masas^[109]. Y es que la «nueva» clase obrera española forjada en el desarrollismo franquista, ciertamente comenzaría a erosionarse a raíz de, entre otros factores, como el elevado desempleo, la reforma laboral de noviembre de 1984, que promovió la tem-

Carp. 8, AHT.

101.- Marcelino Camacho, *Confieso...*, p. 505.

102.- Antonio Izquierdo, «Juicios y actitudes de los trabajadores en paro y los ocupados según encuestas recientes», en *Mientras tanto*, 13 (1982), p. 104.

103.- «Informe de la Secretaría de Organización de la CS de CCOO», Madrid, 24 de julio de 1984, *Secretariado*, Caja 6, Carp. 25, AHT.

104.- *Ibid*, p. 13.

105.- ASC, Madrid, 30 octubre de 1984, *Secretariado*, Caja 6, exp. 32, p. 3, AHT.

106.- ASC, Madrid, 13 noviembre de 1984, AHT, *Secretariado*, Caja 6, Carp. 34, p. 2, AHT.

107.- «El resurgir de los movimientos sociales» GS, 34 (1985), p. 3.

108.- Hay que decir, empero, que los datos usados por CCOO eran las de la CEOE. Según éstos, en 1984, la conflictividad supuso más de 120 millones de horas, unos 15 millones de jornadas sin trabajar. Este nivel de conflictividad, sitúa el año 1984 como uno de los más duros, sólo superado por 1978 en número de jornadas y por 1979 en el total de horas y participantes (aunque por un pequeño margen en esta última variable). 1984, sin embargo, supera ampliamente los dos años referencia en número de conflictos, más de 3.000 frente a las 1789 de 1.979. Otros son, sin embargo, los resultados ofrecidos por el Ministerio de Trabajo. David Luque Balbona, *Las huelgas en España*, p. 350

109.- «Análisis de la evolución de la negociación colectiva en 1985», GS, 35 (1985), pp. 5-9.

poralidad y, por lo tanto, un aumento en la segmentación del mercado laboral. Dichos cambios habrían de incidir en los comportamientos y hábitos sindicales, haciéndose imprescindible una reflexión sobre los comportamientos y actitudes que estas reformas producían^[110]. Una mala gestión o la incomprensión del fenómeno dificultaría al sindicalismo organizar a los nuevos sujetos precarios que quedarían en los márgenes del mercado laboral, con el resultado de provocar una crisis de representación de los mismos y su alejamiento del sindicato.

Lejos de aflojar en lo que el sindicato entendió como una deriva «neoliberal»^[111], el gobierno de González pretendió una reforma de las pensiones que fue el motivo de la convocatoria de un paro general para el 20 de junio de 1985, el primero de 24 horas en democracia^[112]. En un clima de creciente enfrentamiento Redondo-González, CCOO instó a dar respuesta a la arrogancia del ejecutivo, superando las respuestas «puntuales» que los trabajadoras habían dado hasta entonces^[113]. A pesar de la falta de unidad, dada la inhibición de UGT, la convocatoria salió adelante con el apoyo de otros sindicatos. Cuatro millones de personas secundaron la convocatoria, siendo considerada por CCOO como todo un éxito, a pesar de los intentos de desprestigio

desde el gobierno y medios afines^[114]. De la misma manera el seguimiento sorprendió gratamente a actores que, sin embargo, no habían compartido la idoneidad de la convocatoria, como fue el PSUC^[115]. A pesar de la percepción de éxito, fue abriéndose camino la convicción según la cual, para este tipo de movilizaciones, era condición *sine qua non* tratar de arrastrar a la UGT.

La huelga recibiría la aprobación del 56.2% de las personas asalariadas^[116], una cifra un 11,3% por debajo del 14D. En este sentido, no es de extrañar que la central hiciera valoraciones muy positivas, adivinando la posibilidad de imponer un giro en la política del gobierno. CCOO comenzaba a cuestionar así la legitimidad de las políticas del ejecutivo, que había amasado el voto de «una inmensa mayoría que va desde la derecha hasta la extrema izquierda» no para imponer una política de ajuste duro o neoliberal, sino para promover una salida de la crisis más equitativa. En lugar de eso, el gobierno profundizó en las reformas estructurales y centró sus ataques contra el sindicato (temeroso, quizás, de que llegara a articularse una «izquierda real» en torno a la central), recurriendo incluso a revivir el fantasma del anticomunismo^[117].

110.– *Ibid*, pp. 15-19.

111.– El término aparecía ya claramente en «Informe para la reunión del Consejo Confederal de los días 13 y 14 de junio», Madrid, 31 de mayo de 1983, AHT, *Secretariado*, C. 5, Carp. 26, p. 5. De la misma manera fue calificada la concepción de las relaciones laborales de los socialista en el poder Antonio Baylos, «El «cambio socialista» y sus política sociales», *Gaceta sindical*, nº26 (1983) en *Las relaciones laborales en España, 1978-2003*, Madrid, Ediciones GPS, 2003, pp. 48-49.

112.– Véase al respecto Encara Ruiz Galacho, «La huelga de pensiones y «el sindicato comunista», en *Laberinto*, nº31 (2010), pp. 51-64.

113.– «El más duro golpe contra los trabajadores» *GS*, 36 (1985), p. 3.

114.– «20J: respuesta sindical y popular», *GS*, 37 (1985), p. 3. La huelga, apenas queda recogida en los datos del Ministerio de Trabajo, aunque sí podrían reflejarse en los de la patronal. Aunque entrevistado Antonio Gutierrez, éste declara que las cifras habrían sido notablemente sobredimensionadas, Entrevista a Antonio Gutiérrez Vergara, *Biografías Obreras y Militancia Sindical en CCOO*, BIO 52, AHT.

115.– «Poco (o ninguno) eran los que preveían la masividad», Comissió de Política Sindical, «Perspectiva de actuación de los comunistas en el próximo curso sindical», Barcelona, septiembre de 1985, *Fons PSUC*, Caixa 222, Carp. 4639, ANC.

116.– Rodolfo Gutiérrez, «La representación...», p. 31

117.– «La España real y la España oficial», *GS*, 37 (1985), pp. 40-41. En este sentido se pronunciaría también Vázquez Montalbán desde su atalaya de *El País*, en *Felipicas*, Madrid, Aguilar, 1994, p. 91-92.

A finales de 1985, el sindicato hacía un balance positivo de la actividad llevada a cabo. Ésta había repercutido «en el desarrollo sindical y organizativo» y «la amplia participación y respaldo de los trabajadores» había sido evidente. Las huelgas generales de sectores, nacionalidades y regiones afectadas por la reconversión, la campaña de denuncia del AES, la mayor participación de trabajadores en la negociación colectiva y la huelga general habían lanzado a CCOO «a la cabeza de la movilización sindical». En el marco de este crecimiento organizativo se había producido incluso un trasvase de delegados de otras centrales^[118]. Sin embargo, también se advertía de las complicaciones crecientes, en un contexto que sería electoral, y se hacía un llamamiento no sólo potenciar el desarrollo organizativo, sino a mantener las discusiones de índole política fuera del sindicato^[119].

Reconociendo implícitamente la existencia de conflictos en el seno de la central, se recomendaba centrar la actividad en varios ejes de trabajo de materia estrictamente socio-sindical para no entorpecer el normal desarrollo del sindicato. Éstos eran: 1) el desarrollo y apoyo a las movilizaciones que se estaban produciendo en el sector público contra los Presupuestos Generales del Estado (ciertamente las primeras de estas características y magnitudes^[120]), el apoyo a los trabajadores del sector sanitario frente a la Ley de Sanidad, la negociación colectiva, los planes de reconversión y reindustrialización, la Ley de Patrimonio Sindical y la movilización anti-OTAN y 2) crear y consolidar las secciones sindicales en las empresas y preparar las elecciones sindicales que tendrían lugar en 1986^[121].

118.- «A fin de facilitar el debate en la reunión de la CE Confederada», 5 de noviembre de 1985, *Secretariado*, Caja 7, Carp. 21, p. 7, AHT.

119.- *Ibid.*, p. 8.

120.- ASC, Madrid, 22 de noviembre de 1985, Caja. 7, exp. 23, p. 7, AHT.

121.- «A fin de facilitar el debate en la...», p. 9.

1986: CCOO y el cambio que pudo ser

A pesar de las directrices, 1986 fue un año en el que se experimentó un retroceso notable de la conflictividad. Asimismo, se acrecentaron las tensiones en el seno del sindicato, ya que algunos de sus dirigentes competían también en la arena electoral desde opciones políticas distintas. En este contexto, Ariza publicaba un artículo en el cual se proponía un giro ofensivo que abandonase posiciones «conservadores», de concertación, y que aprovechara el supuesto descontento social ante el proceso de ajuste duro que, según el gobierno, se iba a extender hasta 1990. Dinamizar y consolidar la presencia en los centros de trabajo y promover las asambleas, entre otras cuestiones, formaba parte del conjunto de propuestas del candidato de la Mesa para la Unidad de los Comunistas (más tarde Partido de los Trabajadores de España-Unidad Comunista, PTE-UC). Ante las pruebas de que «los trabajadores no se resignan», el sindicato tenía que dar una respuesta «sin radicalismos, pero con mucha coherencia, firmeza y unidad»^[122].

A nivel orgánico estas declaraciones y otras —en las que se acusaba a las Comisiones Obreras de Andalucía de moderación frente al gobierno de Borbolla^[123]— provocaron airadas respuestas. Camacho hacía un llamamiento a una cierta contención en aras de la continuidad del sindicato y aseguraba que «de la unidad de los comunistas no depende el futuro de CCOO»; añadiendo que «[h]ay cosas que el tiempo decide», en

122.- «Las fórmulas de la desestabilización», *El País*, 9 de enero de 1986. Las tensiones del contexto electoral, sobre todo con Ariza, resultan evidentes en las notas de una agitada reunión de órgano confederal, véase ASC, Madrid 11 de febrero de 1986, *Secretariado*, Caja 8, Carp. 5, p. 15, AHT.

123.- Declaraciones en el *ABC* de Sevilla y *El Correo de Andalucía* del 26 de enero de 1986.

alusión a la unidad que podía forjarse aprovechando el movimiento antiatlantista y pacifista^[124]. Asimismo, la corriente mayoritaria señalaba que la línea actual había afianzado la credibilidad del sindicato, la recuperación de otros movimientos sociales y advertía, también, que «[c]rear alarma entre los afiliados y la incertidumbre sobre el futuro de CCOO [...] es el peor servicio que se puede hacer a CCOO», defendiendo en todo momento el carácter democrático del sindicato^[125]. Cada crisis de este tipo parecía, sin embargo, cerrarse en falso y, además, su carácter público debilitaba la imagen de la central.

El resultado del referéndum de la OTAN del 12 de marzo de 1986, en el que CCOO había volcado esfuerzos considerables, también resultó ser indicativo. En efecto, el resultado supuso un evidente espaldarazo al gobierno y constituía claro síntoma, en cierta medida, de la moderación social. A pesar de ello, la central señalaba «el apreciable avance de la base social, dispuesta a apoyar una política de neutralidad, progresista y de izquierdas», una suerte de desiderátum para las elecciones de junio. Los resultados del referéndum mostraban, hay que reconocerlo, cierto desgaste del gobierno respecto de las elecciones del 28O, sin embargo la referencia a una pérdida de «millones» de votos no se correspondía con la realidad. Si bien por un lado se reconocía que los votos negativos en determinadas regiones mostraban «que una parte del voto nacionalista, es en gran medida de

orientación progresista y de izquierdas», se señalaba también que el sindicato no había sido capaz de llegar a personas paradas, jubiladas o jóvenes^[126]. La lectura según la cual parecía posible articular una opción a la izquierda del PSOE, y además con posibilidades de resultar victoriosa, parecía ciertamente más que optimista.

Finalmente, las elecciones de junio de 1986 arrojaron un balance que demostraba que, a pesar de todos los esfuerzos, la ciudadanía mantenía actitudes menos refractarias de las que el sindicato había previsto o no se sentía interpelada por ninguna opción a la izquierda del PSOE. Hay que señalar también que se comenzaba a vislumbrar el proceso de recuperación económica e incluso se generaba ocupación, hecho que podría haber empujado al electorado a apostar por la continuidad y estabilidad política. A pesar de la pérdida de más de un millón de votos y 18 escaños, el PSOE reválidaba la mayoría absoluta e Izquierda Unida obtenía unos resultados realmente modestos. Todo ello con una caída del 10% en la participación. De hecho, la central reconocía los mediocres resultados, la inhibición de la ciudadanía y hacía llamamientos a la unidad de la izquierda para conjurar dichas tendencias^[127].

Si bien el sindicato decía afirmarse en la línea mantenida hasta entonces, resultaba evidente que el resultado de los comicios suponía una impugnación de sus planteamientos y análisis. El desenlace tuvo, también, su translación a las elecciones sindicales de 1986, todo un plebiscito sobre su estrategia de «conflictividad mode-

124.- ASC, Madrid, 11 de febrero de 1986, *Secretariado*, Caja 8, Carp. 5, p. 7, AHT. Para el PCE en la campaña por el referéndum y por el no a la OTAN una vez convocado, así como las esperanzas de recuperación del espacio político perdido depositadas en esta movilización, véase Emanuele Treglia, «La última batalla de la transición, la primera de la democracia. La oposición a la OTAN y las transformaciones del PCE (1981-1986), en *Ayer*, n°103 (2016), pp. 71-96.

125.- *Ibid*, p. 28.

126.- «Continuar la lucha contra el hegemonismo norteamericano y el complejo militar-industrial. Resolución sobre los resultados del referéndum del 12 de marzo», *GS*, 41 (1986), pp. 49-50.

127.- «Ante los resultados de las elecciones del 22 de junio», ASC, 24 de junio de 1986, *Secretariado*, Caja 8, Carp. 6, AHT.

rada», entre la combatividad y el discurso de concertación social. UGT se mantuvo en cabeza. A pesar del eslogan de la «victoria cualitativa», a la que se sumaron incluso algunos medios, y las denuncias de fraude generalizado, si tenemos en cuenta que CCOO había volcado amplios recursos en su oposición y crítica a las políticas gubernamentales y esperaba capitalizar su actitud frente al ejecutivo, los resultados fueron modestos: si bien el número absoluto de delegados aumentaba en casi 35.000, el peso relativo de CCOO apenas aumentaba un 0,4% (59.230), mientras que la UGT crecía un 3% (69.427).

Conclusiones

El período de 1980 a 1986 fue complicado y estuvo marcado por la crisis, la concertación y sus efectos negativos sobre los salarios, los conflictos entre las dos centrales mayoritarias —pero también en su seno, como hemos visto— y la profundización en la fragmentación de la clase trabajadora en paralelo a la del mercado laboral. Si bien ésta no había sido un todo homogéneo, asociada al paradigma del obrero fordista varón, sí que era de este estrato el lugar del cual surgían sus segmentos más combativos. El proceso de crisis asedió este bastión de clase que, acorralado por la reconversión, dio muestras de un radicalismo notable en defensa de los puestos de trabajo. El proceso de crisis y reestructuración, además de minar la base sobre la cual se había sustentado el «nuevo» movimiento obrero, también tuvo un impacto notable en las identidades y en las actitudes sindicales. En este sentido, si en 1980 un 37% de los trabajadores se identificaban como clase obrera, este porcentaje había caído a un 20% en 1984^[128].

128.—Víctor Pérez Díaz, *La primacía...*, p. 294.

El sindicato, como hemos visto, no era ajeno a este proceso. El supuesto giro conservador en las actitudes suscitado por la crisis económica lo inducirá —a su vez inmerso en un difícil proceso de extensión, consolidación organizativa y de lucha/adaptación al nuevo marco jurídico— a adoptar una estrategia de conflictividad moderada que generó, a su vez, animados debates internos. Y es que, para trazar la acción sindical y establecer sus posicionamientos políticos, la central se guiaba según los distintos indicios: fundamentalmente a través de la prensa y medios ajenos y otros indicadores más o menos volátiles como son los resultados electorales, las movilizaciones o la conflictividad laboral —sujeta tanto al calendario de la negociación colectiva como al electoral—, etc. Todo ello con la presión añadida de ser prácticamente la única oposición efectiva al gobierno, ejercida principalmente en la calle^[129].

Respecto a las actitudes políticas el sindicato constató, a principios de los ochenta, que sus bases se circunscribían a los sectores más «radicales» de la clase trabajadora y trató por ello de moderar sus posiciones en aras de interpelar al resto; deviniendo esta tendencia, en determinados momentos, en una auténtica obsesión «antiizquierdista» que trataba de huir de aquello que, más adelante, se llamará una suerte de «política-espectáculo sin arraigo de masas»^[130]. Esta visión cobraba sentido en un contexto en el cual la competencia entra las centrales aumentaba y UGT parecía gozar de más apoyos entre los sectores más moderados, mientras crecía la identificación de CCOO con posicionamientos más radicales.

Esta percepción del supuesto carácter moderado de la clase, en buena medida fru-

129.—José M.^a Marín Arce, «La fase dura...», p. 100.

130.—José Luis López Bulla, «Carta abierta a Marcelino Camacho», *El País*, 19 de octubre de 1984.

to del impacto de la crisis económica, entre otros elementos, llevó a un breve período marcado por la concertación social. En este sentido, la central firmó sendos acuerdos, el ANE (1981) y el AI (1983), con el objetivo, entre otras cuestiones, de que la negociación centralizada permitiera representar los intereses de las nuevas cohortes de trabajadores no sindicalizados —siguiendo la lógica un tanto borrosa del «sindicato de nuevo tipo»— así como conseguir atraer a aquellos que veían en UGT una actitud más proclive a la negociación y a la resolución no «principista» de los conflictos. Esta directriz, estaba también imbuida de cierta percepción de que la complicada coyuntura económica impedía adoptar una posición ofensiva dado el retraimiento conservador de la clase trabajadora, que sólo se veía abocada a cruentos conflictos a la desesperada cuando se encontraba ante la posibilidad de perder sus puestos de trabajo.

Con la victoria socialista y la política continuista de ajuste, determinados sectores de CCOO —paradójicamente, en buena medida correspondientes a los que habían promovido actitudes más moderadas con anterioridad— creerán oportuno aprovechar el descontento que habría de producir

dicha política para forzar un giro en el gobierno o el cambio político. Si bien ciertas apelaciones al «realismo sindical» continuaron presentes, poco a poco, y sobre todo a partir del III Congreso, la central endurecerá sus posicionamientos convencida de poder recuperar de esta manera el terreno perdido frente a la UGT en las elecciones sindicales del 82 y erigirse, así, en mejor representante de los intereses de los asalariados ante la actitud del gobierno.

A pesar de ello, el posicionamiento adoptado no bastó para impedir que la central —y el campo político a la izquierda de los socialistas en general— cosechara dos importantes derrotas. Por un lado el referéndum de la OTAN y, finalmente, las elecciones de junio del 86, que demostraron que la erosión llevada a cabo no había sido suficiente y que el gobierno seguía generando amplios consensos entre la clase trabajadora. Asimismo, los sectores que acabaron por alienarse del mismo tampoco optarían por opciones más a su izquierda y sí por la abstención. Todo ello llevaría a un necesario proceso de redefinición e, incluso, a cambios orgánicos en 1987 a raíz del IV Congreso, que valoró con severidad la línea desarrollada hasta entonces.